

## **"La dinámica procesal entre el Vicario Judicial y el Defensor del Vínculo en los procesos de nulidad matrimonial canónica: con especial referencia al proceso más breve"**

La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial llevada a cabo por el motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con el que el Papa Francisco, reformando el proceso de nulidad matrimonial, invita a una renovación de las estructuras eclesiales judiciales a la luz de su finalidad pastoral y de la doctrina de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, ha significado para los **operadores de justicia** un importante desafío, tanto a la hora de proceder a su interpretación como en su aplicación forense.

Entonces, tanto la reforma legal misma como más hondamente, la renovada concepción del sentido y finalidad de los mismos, "comunicar la gracia divina y favorecer el bien de los fieles", plantea importantes cuestiones procesales respecto a la actuación tanto del Vicario Judicial (VJ) como del Defensor del Vínculo (DV) en los nuevos procesos de nulidad matrimonial.

Esta reforma, aun en curso de acogida, ha sido, desde un principio, en general, mirada y analizada, considerada y aplicada, con crítica y desconfianza. Las altas expectativas que suscitó, ha creado también falsas convicciones y errores aplicativos. Lo anterior ha creado incertidumbres interpretativas e inseguridades aplicativas, lo que ocasionado desvirtuar su espíritu. Tanto un malentendido y pernicioso laxismo, un descuido pastoralismo, como un rigorismo extremo, distorsionan la intención de la nueva ley y la razón última de la justicia matrimonial eclesial.

En vista de los cambios introducidos en la regulación del proceso mismo, con especial mención a la desaparición de la *duplex conformis* en estas causas y con la aparente presunción de nulidad del matrimonio, que contradice la presunción de validez del vínculo matrimonial, es de fundamental importancia comprender bien la actuación presencial, eficaz y activa del VJ y del DV, quienes deben cumplir sus funciones en el respeto de la verdad y en el ejercicio de todas las facultades que el derecho les concede (art. 56; 279, DC).

Por razones metodológicas y de brevedad se omiten en esta presentación todos aquellos aspectos acerca del VJ y del DV que no aparezcan directamente reflejados en el texto del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* y que no hayan sufrido modificación sustancial.

## **I. La deontología: Principios de actuación del VJ y del DV**

1) **El VJ. Impartir Justicia en la Iglesia corre a cargo del Obispo y del Vicario Judicial, que son los sujetos que, habitualmente, se encargarán de la resolución de un proceso de nulidad matrimonial eclesiástica.** El MIDI ha reconocido, considerando la deseada agilidad procesal, nuevas funciones al VJ, quien ejerce a nombre del Obispo la potestad **judicial** en la diócesis. Nada ha cambiado en relación a la obligatoriedad de su nombramiento por parte del obispo ni a los requisitos de su nombramiento (c. 1420). A él le corresponde, admitir la demanda, constituir el tribunal sentenciador, nombrar el DV, notificar el libelo, determinar la fórmula de dudas, elegir el tipo de proceso a seguir, disponer la constitución del colegio en caso del proceso ordinario, y el de nombrar el instructor y el asesor en el proceso brevior, y de citar a la sesión de instructoria en el mismo. Todo lo anterior ha hecho que la introducción de una causa de nulidad matrimonial se haya agilizado y facilitado. Por ejemplo, en algunos tribunales eclesiásticos, se ha optado de modo estable que sea él quien reciba el libelo. En relación al DV, no solo le corresponde nominarlo, sino que una vez designado mediante decreto, debe entrar en relación continua con él y su oficio.

2) **El DV.** Para todas las causas de nulidad de matrimonio en cada uno de los tribunales diocesanos e interdiocesanos debe nombrarse establemente al menos un defensor del vínculo. En las causas de nulidad del matrimonio el defensor del vínculo es siempre parte demandada, necesaria para la validez del proceso y de la sentencia. La configuración que el CIC/83 hace del DV no ha cambiado con el m.p. *Mitis Iudex*, el cual mantiene tanto la exigencia de su **necesaria intervención** en estos procesos de nulidad (c. 1432; 1678), bajo pena de nulidad (c.1434), como **los requisitos** para su nombramiento –de



titulación académica y de juramento, (c.1435; 1454), etc. El DV puede ser clérigo o laico, hombre o mujer (cfr. arts. 53-58 de la DC; can. 1435). El c.1432 establece su presencia obligatoria, su actuación pro vinculo y el carácter razonable que debe tener su modo de proceder.

**Las novedades sobre la presencia y actuación del DV durante el proceso de nulidad matrimonial están contenidas en tres cánones.**

El **can. 1676 §§ 1-2** que confía al VJ la tarea de notificar el libelo al DV y evaluar sus observaciones antes de decretar la formulación de la duda, así como también la decisión de si el caso será tratado por el proceso ordinario o por el proceso más breve.

El **can. 1680, § 1** que, a pesar de la supresión de la doble sentencia de nulidad, conserva el derecho de apelar o interponer querella de nulidad al DV cuando estima que la sentencia lesiona la verdad del vínculo matrimonial; el **can. 1680, § 2** que establece que el Tribunal de Apelación tiene la posibilidad de confirmar la sentencia afirmativa o negativa apelada por decreto colegial solo después de haber recibido las observaciones del DV de segundo grado.

Finalmente, el **can. 1687, § 1** que señala el Obispo diocesano pronunciará una sentencia afirmativa en el proceso brevior solo si ha alcanzado la certeza moral sobre la nulidad solo después de haber obtenido las animadversiones que el DV ha elaborado sobre la base de la prueba reunida.

El legislador del MIDI ha rebatido en su discurso a la Signatura apostólica del año 2013, su insustituible y necesaria función: “La atención dirigida al ministerio del DV es, sin duda, oportuna, **porque su presencia y su intervención son obligatorias para todo el desarrollo del proceso** (cf. *Dignitas connubii*, 56, 1-2; 279, 1). Del mismo modo está previsto que él proponga todo tipo de pruebas, excepciones, recursos y apelaciones que, en el respeto de la verdad, favorezcan la defensa del vínculo”.

Los **criterios razonables de actuación del DV** están claramente establecidos en el cuerpo legal fundamental de la Iglesia.

- a. **Identidad procesal del DV.** La doctrina canónica considera que el DV en aquellas causas en que interviene (can.1432) sino se establece expresamente otra cosa (can.18) es **parte procesal** (can. 1434). De hecho, **se le puede ver actuando con funciones similares a las de las partes o de sus abogados.** Como **parte pública** en el proceso en donde se discute la nulidad o disolución de un matrimonio, su presencia no se puede reducir "a un insignificante requisito formal haciendo que esté prácticamente ausente de la dialéctica procesal la intervención de esa persona cualificada que realmente indaga, propone y clarifica todo lo que razonablemente puede aducirse contra la nulidad" (Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana de 1988, n. 2).
- b. **Actuación presencial, activa y responsable.** Él debe investigar, exponer y clarificar todo aquello que puede razonablemente señalar en favor del vínculo matrimonial.

*Canon 1432: Para las causas en que se discute...la nulidad o disolución de un matrimonio, ha de nombrarse en la diócesis un DV, el cual, **por oficio, debe proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución.***

**La nueva normativa procesal matrimonial, en tal sentido,** reafirma la responsabilidad del DV de proponer todo tipo de pruebas, excepciones, recursos y apelaciones que, respetando la verdad, **favorezcan la defensa del vínculo** tanto en las causas de nulidad del matrimonio como en la disolución del matrimonio rato, pero no consumado. Al DV le corresponde una función activa y responsable, porque "si su participación en el proceso se agotase en la presentación de observaciones meramente rituales, habría fundado motivo para deducir de ello una inadmisibile ignorancia y/o una grave negligencia, haciéndolo responsable en relación con la justicia, puesto que su actitud debilitaría la búsqueda efectiva de la verdad, la cual debe ser siempre «fundamento, madre y ley de la justicia»" (Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana de 1988, n. 13).



- c. **Actuación necesariamente parcial (pro vinculo).** Tal criterio, como lo establece el canon 1432, a la luz del principio de celeridad estructurante el MIDI, no justificaría nunca, obviamente, ni una actuación obstruccionista ni menos falaz; debe actuar siempre eficientemente, con recta conciencia y en verdad. La intervención del Defensor en la causa de nulidad matrimonial debe ser necesariamente **favorable –por prescripción legal– a la validez del vínculo matrimonial**. Pero esta noble función suya, “no significa que corresponda a él valorar los argumentos en pro o en contra y pronunciarse sobre el fondo de la causa; ni que él deba construir «una defensa artificiosa, sin preocuparse si sus afirmaciones tienen un serio fundamento o no»” (JP II, Discurso a la Rota Romana de 1988, n. 2). Urgido por la ley a actuar en respeto irrestricto de la verdad, deberá ser capaz de poder evaluar objetiva y efectivamente los hechos constitutivos de cada etapa procesal, y de este modo su actuación deberá poseer, “las características de defensa y discusión de los argumentos a favor y en contra de la invalidez, así como la recolección de pruebas en una dirección u otra”.
- d. **Actuación razonable.** La **razonabilidad** de la defensa pro vinculo, aparece, no solo como el deber deontológico del DV, sino también, como un criterio delimitador y racionalizador de la actuación del DV, en un doble sentido: en negativo, como límite que impide cualquier actuación irrazonable, obsesiva, exagerada, escrupulosa en defensa de la validez del matrimonio; en positivo, como criterio guía de la actuación de su ministerio público de defensa de un bien público, quien debe manifestar “**todo aquello (omnia) que pueda aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución**”. No resultaría coherente, en este sentido, que sus actuaciones se caracterizaran por un estilo agresivo, avasallador, inquisitorial, insultante o suspicaz; también el DV –sin perjuicio del adecuado y fiel cumplimiento de su misión en el proceso– debe contribuir, con su actuación, a que se realice la llamada solicitud pastoral *pro veritate* (art.1).

Su presencia (can. 1470; 1432) y el correcto ejercicio de sus funciones, constituyen, entonces, en el nuevo proceso de nulidad matrimonial canónica, **una garantía del reconocimiento del *ius defensionis* de todas las partes y de la defensa de la visión cristiana del matrimonio**. Tanto es así que, aún en el nuevo proceso de nulidad matrimonial, especialmente cuando ambas partes acuerdan solicitar la declaración de nulidad por el proceso más breve, pero no solo: **“...el DV que desea prestar un buen servicio no puede limitarse a una lectura apresurada de los hechos, ni a respuestas burocráticas y genéricas”**. Lo anterior permite sostener que la intervención del DV debe ser no solo necesaria y parcial, ni tampoco, solo razonable, sino, además, **“realmente cualificada y perspicaz**, de modo que contribuya eficazmente a la clarificación de los hechos y de los significados, **convirtiéndose también en las causas concretas, en una defensa de la visión cristiana de la naturaleza humana y del matrimonio** (Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana de 1988, n. 3).

## **II. La circularidad procesal en las actuaciones del VJ y del DV en el proceso más breve**

Considerando, entonces, los principios deontológicos señalados, aplicables a la función y a la actuación tanto del VJ como del DV en el nuevo proceso de nulidad matrimonial canónica, analizaremos lo que he llamado el “diálogo procesal” que se establece entre ellos con el mismo objetivo, encontrar la verdad para el matrimonio en cuestión.

Seguiremos durante esta presentación el curso lógico y cronológico del proceso señalando las funciones que a ambos les corresponden en cada uno de los momentos o etapas procesales (admisión de la demanda, citación, determinación de la postura procesal de la parte demanda, fijación de la fórmula de dudas, determinación del proceso a seguir, la función de ambos en el proceso más breve y la ejecución de la sentencia).

### **1. Fase introductoria de la causa**



**a) Presentación del Libelo:** El escrito de demanda presentado por ambas partes o por una con el consentimiento de la otra, debe ir siempre dirigido al Obispo diocesano, libelo que podrá presentarse ante el mismo Obispo o ante el VJ. Si la demanda fuera presentada únicamente ante el Obispo diocesano, éste deberá dar traslado del escrito al VJ, quien es en el tribunal el único competente para admitirlo o no.

Corresponde al VJ (aunque el texto del c. 1675 dice solamente «el juez») por el orden en que se encuentra el mismo texto del canon, (esto es una de las imprecisiones técnicas del MIDI) antes de aceptar el libelo, «tener la **certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente**.

**b) Admisión del Libelo.** A falta de una norma expresa, el texto del nuevo can. 1676, que a mi entender se aplicaría a esta etapa del proceso más breve junto al can 1685, establece que corresponde al VJ la **admisión de la demanda si considera que ésta tiene fundamento**. También, a tenor del c. 1505, sería posible que el VJ **rechace** la demanda si a su juicio no tuviera fundamento o no tuviera alguno de los elementos previstos por el derecho (cann.1504 y 1505). En la praxis habitual de muchos tribunales, antes de la reforma, recibida la demanda, el VJ constituía por turno el colegio que debía conocer la causa, correspondiendo al Presidente del mismo la tarea de admitir o rechazar la demanda (DC art. 46 § 2, 7º). Hoy en día es el VJ quien es titular de esta facultad. Para esto se debe atener a lo establecido en el c. 1505 §§ 1,2 teniendo en cuenta el importante cambio introducido en los foros de competencia por el nuevo c. 1672.

La instrucción DC en su artículo 119 §2 establece que, **antes de admitir la demanda, es oportuno que el presidente escuche al DV**. A la luz de la DC, art. 56,1, que señala la presencia obligatoria del DV, y pese a las notables –y en ocasiones confusas– novedades introducidas por el c.1676 en la tramitación de la admisión de la demanda, la reforma procesal no modifica en la sustancia la actuación del DV en este momento procesal, a quien el VJ, si considera que el escrito de demanda se apoya en algún fundamento, **debe ordenar que “se envíe una copia al DV”, para que él pueda contestar a la misma**, pudiendo

**interponer, en su caso, en cuanto parte, todas las excepciones procesales que procedan contra la misma.**

En la praxis forense se observan situaciones bien diferenciadas respecto a este momento introductorio del proceso: no faltan tribunales en que, como consecuencia de una mal entendida pastoral, de la impericia de algunos abogados o incluso de la misma sobrecarga de trabajo provocada por la multiplicidad de causas, se observa un incremento de **demandas con una notable ausencia de *fumus boni iuris***, en las que apenas se aportan datos relevantes, o se solicitan un número desproporcionado de capítulos de nulidad, o incluso en las que los hechos narrados no coinciden con los capítulos invocados, a pesar de lo cual, estos libelos son en ocasiones admitidos. En estos supuestos, **resultaría exigible una actuación diligente por parte del DV**, indicando en su caso esta posible falta de fundamento de la demanda o de algunos de los capítulos invocados, de modo que pueda el juez tenerlo en cuenta a la hora de la fijación del *dubium*.

**c) Apertura del proceso más breve:** El VJ, una vez que ha admitido el libelo a tramitación, deberá: a) controlar la presencia de los requisitos establecido en el can. 1683; b) determinar la fórmula de dudas; c) nombrar el instructor y el asesor; d) citar a las partes, el defensor del vínculo y los testigos, para la sesión de instrucción o de recolección de pruebas, a celebrarse dentro del plazo de treinta días.

Es facultad exclusiva del VJ (can. 1685) admitir o no el libelo a una tramitación por el proceso más breve. El Subsidio contempla, en diversos números, la conveniencia de que el Obispo confeccione para su diócesis un conjunto de criterios que entre otros aspectos instruyan al VJ a la hora de elegir la oportunidad del proceso más breve o del ordinario.

En relación al **DV** en esta etapa del proceso, en general, resulta llamativa la escasa y expresa referencia que de él se hace en el MIDI. Solo se menciona, expresamente y únicamente, en relación a la **presentación de las observaciones tras la instrucción de la causa** (c.1686).

El **art.15** de las RP, pero, establece un importante caso para poder entender y reconocer el papel y la actuación del DV en este tipo de proceso más breve. El artículo establece la posibilidad y la condición de **conversión procesal**. Si el



escrito de demanda ha sido introducido por una parte para introducir un proceso ordinario, pero el Vicario judicial considera posible la aplicación del proceso abreviado, no se debería limitar a **notificar** el escrito de demanda a la otra parte y al defensor del vínculo, sino que debería también **invitar** a la parte que no ha firmado el escrito de demanda original a expresarse sobre su voluntad de asociarse a la demanda y participar en el proceso más breve. En caso afirmativo, debe también pedir a las partes, si fuera el caso, que completen el escrito de demanda con todos los elementos requeridos para el proceso más breve (can. 1684), de modo que se tenga la exposición breve, íntegra y clara de los hechos sobre los que se fundamenta la demanda, y el elenco de las pruebas que puedan ser inmediatamente recogidas por el instructor. El plazo establecido para ello es de quince días desde la notificación de la demanda. En la praxis resulta más eficaz citar al Tribunal a la parte demandada para que, recibida la demanda, comparezca ante el VJ y pueda recibir una información más detallada sobre el tipo proceso de nulidad y las opciones que puede tomar manifestado entonces expresamente su posición. De no ser así, es decir, la parte demandada se asocia al libelo, pero no adhiere a la propuesta del VJ de participar en el proceso más breve, el VJ no estaría legitimado a tramitar la causa por el proceso más breve debido a la propia coherencia interna de la configuración de este proceso.

Ahora bien, en el caso de la **conversión procesal**, y considerando lo que establece el art.15 que “el Vicario, al notificar el escrito con arreglo al can. 1676,1” (el que estable que una vez admitido el libelo “ordene que se envíe una copia al defensor del vínculo”), deberá en caso de conversión procesal, además de notificar a la parte demandada para que firme el libelo y se asocie a la tramitación abreviada, también el VJ deberá **notificar el escrito de demanda a la otra parte y también al DV para que manifieste su opinión sobre el escrito y sobre la posibilidad de tramitar la causa por el proceso abreviado**. “En efecto, será la presencia del DV en todas las fases del proceso la que garantizará el contradictorio” (can. 1433). Subrayo, en todas las fases del proceso, también en la introductoria, con la novedad de la determinación del tipo de proceso a seguir.

**d) Control de requisitos.** Estamos aún en una etapa previa a la instructoria, llamada de Introducción del proceso.

Respecto al proceso más breve, habiendo ya aceptado el libelo, recibida el parecer del DV, la primera función del VJ es, con toda esa otra información, comprobar o no, y de modo definitivo, la existencia de los elementos enumerados en el can. 1504 y comprobar, además, si el libelo cumple con los requisitos de estilo que exige el can. 1684, pero, además, deberá, controlar la existencia y entidad de los dos requisitos exigidos contemporáneamente por el c. 1683 “cada vez que”, es decir, siempre que: 1º la petición haya sido propuesta por ambos cónyuges o por uno de ellos, con el consentimiento del otro, consentimiento de ambas partes, (público e inequívocamente manifiesto, es un requisito sine qua non); 2º concurren circunstancias de las personas y de los hechos, sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa, y hagan manifiesta la nulidad. Requisitos que tendrán evidentemente un reflejo objetivo, es decir, no dependen de la arbitrariedad del VJ sino de la realidad fáctica de la existencia o no de tales hechos; por tanto, la apertura del proceso no depende de la voluntad de los propios cónyuges ni de la capacidad discrecional del juez, sino que únicamente se podrá abrir si se cumplen todos los requisitos contemplados en el mencionado canon 1683.

Es decir, el VJ deberá determinar, y el DV, garantizar, que los cónyuges están de acuerdo en la común voluntad de pedir la **declaración de nulidad matrimonial por medio del proceso más breve e igualmente por los mismos motivos de fondo** no debiéndose exigir un acuerdo completo en los detalles o interpretación de los mismos, porque se trataría entonces del conocido ***litisconsorcio voluntario procesal y activo*** de los esposos, lo que no se exige por la ley. Como fue aclarado a través de una respuesta particular del Pontificio Consejo para los textos legislativos, la presunción prevista en el artículo 11 §2 de las Reglas de procedimiento (cuando la parte demandada se remite a la justicia del Tribunal o no responde a la citación, se considera que no se opone a la demanda) no se aplica al proceso más breve, por lo que no podría el VJ valerse de tal presunción para considerar existente la primera condición para el proceso más breve. La aportación en la demanda de los elementos necesarios para que el VJ pueda percibir la evidencia de la nulidad es el elemento crucial en lo que se refiere a esta condición.



De alguna manera, más allá de los elementos formales, can. 1684, debe adquirirse en el VJ una forma de certeza moral que le permita decretar el proceso más breve ante el Obispo; obtener la certeza de la evidencia de la nulidad del conjunto de pruebas presentadas en el momento inicial del proceso y comprobar que efectivamente y sin duda la petición de ambos cónyuges de tramitar la causa por el proceso abreviado. Todo esto exige, creemos, la participación activa del DV quien deberá manifestar su opinión acerca de todo lo anterior.

Entonces, por las particulares características del proceso más breve, cann. 1683-1687, proceso extraordinario que se realiza coram Episcopi y que exige dos condiciones esenciales (can.124), la presencia (can. 1433) e intervención del DV son de suma importancia, “lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado”, es indudable que, siendo la única **parte publica**, deberá notificársele **después de haber sido aceptada a tramitación y antes de que se determine por decreto la forma procesal**, el libelo de los cónyuges, dándole posibilidad de presentar sus observaciones sobre las condiciones del libelo para el proceso breve antes de la fijación del dubio (can. 1434).

A la luz del can. 1676 §§2,3, la nueva ley señala que es el VJ quien deberá establecer, **“después de haber oído el DV”**, *“si la causa debe tratarse con el proceso ordinario o con el proceso más breve”*, yo agregaría, o por el proceso documental (can.1688). No será ni la petición de parte ni el parecer del DV, el criterio determinante, sino su personal reflexión respecto a las condiciones que la ley establece para emprender cada una de las vías procesales. Decisión ésta que es ex officio, decisión que deberá tomar de acuerdo con lo establecido en la legislación, lo aplicado en la jurisprudencia y en «conformidad con los criterios del obispo diocesano» y en cumplimiento de la ley. Por lo tanto, **también al DV, se le debe dar traslado en relación la posibilidad de manifestar su parecer sobre la vía procesal elegida sea tanto por las partes como a propuesta del Vicario (art.15)**. Lo anterior se sostiene jurídicamente por aplicación tanto de los cann. 1434 y 17 **“intención del legislador y lugares paralelos”**, como del can. 19 **“leyes dadas para los casos semejantes”** es decir, lo establecido expresamente en el can. 1676,1-2, que establece que el VJ actuará decidiendo la fórmula de dudas y la

**determinación del tipo de proceso, sólo “después de oír al DV”** y en el can. 1688 acerca la emanación o no de una sentencia de nulidad matrimonial por medio del proceso documental para lo cual deberá solicitar siempre la “intervención del DV”. Entonces también en la determinación del proceso más breve, el DV debe intervenir, bajo pena de nulidad del acto si no se ha realizado su convocatoria, can.1507; 1511

**e) Fijación términos del Dubio.** Una vez que el VJ ha decretado la admisión del libelo y determinado la forma procesal más breve, “en conformidad con los criterios del Obispo diocesano”, habiendo escuchado al DV debe sin más dilación **fijar por medio de un decreto la fórmula de dudas y nombrar un instructor y un asesor conforme al canon 1685**. Conforme al artículo 16 de las reglas de procedimiento el propio VJ puede nombrarse instructor.

En ese mismo **decreto determinará en un plazo no superior a treinta días la correspondiente sesión para la ejecución de las pruebas presentadas**. El DV, quien tiene solo función consultiva en esta etapa, podrá informar sobre la corrección técnica de la fórmula de dudas propuesta por la parte, insistir en que se eviten formulaciones difusas o confusas de los capítulos de nulidad, etc. En cualquier caso, el DV deberá, bajo pena de nulidad, ser oído tanto antes de la fijación del dubium como en cualquier eventual modificación del mismo, conforme dispone el c.1514. Podrá recurrir contra dicho decreto ante el colegio en el plazo de diez días, según el art.135.4 DC (cc.1513,3 y 1677,4).

## **2. Fase probatoria de la causa**

Establece el **can. 1685** que el **VJ** debe citar a las partes, al **DV** y a los testigos, para la **única sesión de la instrucción**, a celebrarse no más allá de treinta días. La instrucción tendrá por objeto la adquisición de las pruebas presentadas en la demanda o eventualmente establecidas de oficio por parte del VJ.

El art.17 contempla la posibilidad de que al menos tres días antes de la sesión para la ejecución de las pruebas, si es que no hubieran presentado las preguntas en el escrito de demanda, las partes puedan presentar interrogatorios para ellas mismas y para los testigos. **Lo mismo vale para el DV**, en cuanto también él es “parte” en el proceso, justamente la parte pública



y de acuerdo al art. 17, le corresponde una igualdad procesal, por lo que, también tiene la posibilidad de presentar las preguntas para el interrogatorio de los cónyuges y de los testigos, con al menos tres días de anticipación a la sesión mencionada más arriba.

De acuerdo a los cann. 1677-1678, en esta fase el VJ no tiene ningún papel directo, pero si lo tiene el DV, a quien le corresponde el derecho, según el texto del can. 1677, en cuanto mantiene el principio de **total equiparación jurídica entre las partes**, públicas y partes privadas, **asistir** al examen de las partes, testigos y de los peritos, **conocer** las actas judiciales antes de su publicación y **examinar** los documentos presentados por las partes. El art. 56, **§ 3, señala que el DV** “Debe, en toda instancia, **proponer toda clase de pruebas, oposiciones y excepciones que, sin perjuicio de la verdad de los hechos, contribuyan a la tutela del vínculo**” (cf. can. 1432). La realización de la instrucción del proceso más breve, en los términos establecidos por el motu proprio, hacen, no solo posible sino, sobre todo, **obligatoria y aconsejable la presencia física y la intervención activa del DV en la sesión instructoria de la prueba. Su presencia e intervenciones** harán posible que se aclaren, si fuera el caso, cualquier duda razonable que arrojen los hechos, dichos, pruebas e indicios aportados con la demanda.

### 3. Fase de Discusión

En este tipo de proceso de nulidad matrimonial no está prevista la publicación de las actas vista la participación activa de las partes.

a) Concluida la sesión/es de instrucción, como no se contempla un periodo de discusión propiamente tal, en aras del ineludible ius defensionis, se establece que “finalizada la instrucción el instructor fije el término de 15 días para la presentación de las observaciones a favor del vínculo, por parte del DV y los alegatos de las partes, si la hay” (cann.1685-1686). Todo ello en una única ocasión; no existe por tanto posibilidad de réplica. El DV el mismo día de conclusión de la sesión de instrucción, debe **recibir copia de todas las actuaciones**, sin que sea necesaria una explícita publicación de las actas (porque las partes, y sus abogados si participan en el proceso, estuvieron presentes en la sesión), **y con el fin de que no se dilate el proceso, se fija un**

plazo legal de 15 días para la presentación de observaciones por su parte (cann. 1686-1687). El defensor del vínculo debe presentar sus observaciones, y las partes pueden presentar sus defensas. El DV deberá preparar sus observaciones, con lo que se da lugar a la fase discusoria de la causa. Es clara la diferencia que establecen los cánones: **para el DV es una obligación**, ya que el suyo es un oficio público, mientras que para las partes es un derecho que pueden o no ejercitar: “si las hay”. Todo lo anterior en una única ocasión; no existe por tanto posibilidad de réplica ni menos de duplica.

**b) La valoración de la prueba**, en el MIDI, **se mantienen y explicitan** algunas cuestiones que, estando ya presentes en el Código y DC, son, con frecuencia, poco o mal aplicadas en la práctica, por lo que el legislador considera oportuno insistir en ellas. Entre estas cuestiones, tiene especial importancia la insistencia en el **valor probatorio de las declaraciones de los cónyuges-esposos**, los principales conocedores de los hechos de su matrimonio: se lee en el can. 1678,1 “en las causas de nulidad de matrimonio la confesión judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales testigos sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor de prueba plena, que debe valorar el juez considerando todos los indicios y adminículos, si no hay otros elementos que las refuten” (c.1678,1). En este sentido, el DV **deberá, lógicamente, en el análisis de estas declaraciones o confesiones, señalar si fuera el caso, las incoherencias o contradicciones que se observen en cada una, o entre ellas y el resto de la prueba obrante en autos**, sin entrar en sospechas apriorísticas ni prejuicios infundados contra la credibilidad y veracidad de los cónyuges. Se trata de disposiciones legales muy precisas, por lo que deben ser aplicadas sin reticencia alguna, evitando praxis contrarias en materia.

#### **4. Fase decisoria de la causa**

El párrafo primero del can. 1687 señala que el instructor debe dar traslado de las actas de la causa al Obispo diocesano, como también de las observaciones del DV como de las alegaciones de las partes si las hubiera. Una vez recibida las actas el Obispo diocesano, debe consultar con el instructor y el asesor sobre el mérito de la causa, **deberá ponderar las observaciones del**



DV, que **son siempre necesarias**, y finalmente si alcanza la certeza moral dictará una sentencia afirmativa. El único que debe alcanzar personalmente la certeza moral ex actis et probatis es el Obispo. Si el Obispo no alcanza la necesaria certeza moral, deberá remitir la causa al proceso ordinario, es decir, no se contempla la posibilidad de una sentencia negativa.

**5.- Fase ejecutoria de la sentencia** (c. 1682 § 2). El canon 1679 establece que la sentencia que declara por primera vez la nulidad, trascurridos los términos legales para recurrir, se hace ejecutiva. En el canon 1687,2 se establece que el texto íntegro de la sentencia con las motivaciones debe notificarse a las partes y al DV dentro del plazo de un mes desde el día en que se tomó la decisión, así viene especificado en el art. 20,2. El canon 1682 § 2 responsabiliza al VJ de la tarea de notificar la **sentencia que se haya hecho ejecutiva** al Ordinario del lugar en el que se celebró el matrimonio, siendo este último el responsable de la anotación de la nulidad y de las eventuales prohibiciones impuestas, en el libro de matrimonios y también en el de bautismos.

Por último, según el texto de can. 1687,3, el DV **podrá tener un papel destacado en la posible interposición de la apelación** contra la sentencia – necesariamente afirmativa– del Obispo en estos procesos. No cabe duda de que la nueva ley prevé la posibilidad de que el DV pueda, en cumplimiento de su ministerio, **apelar contra la sentencia que considere infundada** (cann. 1598-1606), lo que resulta coherente con la naturaleza judicial del proceso de nulidad matrimonial y con la necesaria salvaguarda de la indisolubilidad del matrimonio.

En este caso es al VJ a quien le corresponde el deber de dar traslado y remitir el expediente al Tribunal competente para tratar la apelación.